

## CONTROL DE DROGAS

# Un encuentro fructífero

□ Ciento cincuenta delegados de dieciocho países se dieron cita en Chile.

Fueron ciento cincuenta pares de oídos los que escucharon atentamente cada una de las exposiciones. Representantes de veintiocho países de América y Europa se dieron cita — la semana pasada —, en Santiago, para la primera reunión internacional de Jefes Nacionales de Drogas.

La asistencia de siete ministros de Estado y autoridades de gobierno fue indicio claro para los asistentes de la importancia que reviste el tema de las drogas y su control.

El trabajo de cada una de las comisiones que se constituyeron estuvo centrado en analizar diversos aspectos tendientes a lograr una mayor coordinación regional en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico.

Para los especialistas, una de las interrogantes, o puntos básicos a considerar, fue tratar de contestar "Por qué se droga la gente".

Como señala un experto de la Organización Mundial de la Salud, Granier Doyeux, para usos médicos y legales, basta solamente una producción de ochocientas toneladas de opio al año, y se producen actualmente más de dos mil.

Las dos mil doscientas toneladas de "remanente" son distribuidas entre los narco-dependientes, con la agravante de que "basta" unas diez toneladas para abastecer el consumo de unos seiscientos mil adictos a la heroína.

En la conferencia se analizó, también, la realidad chilena, exponiéndose los diversos programas llevados a cabo por el gobierno para combatir este grave problema.

Así, se indicó que desde 1982 está en marcha una política a escala nacional — se creó la Comisión Nacional para el estudio del uso y abuso de las drogas —, concediéndosele una alta jerarquía. A través de dicha comisión, que depende directamente de la Presidencia, se formulan las grandes políticas a seguir, en acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación.

En la sesión de clausura, el director general de Investigaciones, Fernando Paredes, formuló su esperanza en el éxito de la lucha contra el narcotráfico, para lo cual se buscaron y continuarán buscando fórmulas que permitan evitar el panorama desolador de quienes se ven amenazados por este flagelo. ■

## JAIME GUZMAN

# Contraste elocuente

En tiempos confusos como los que vivimos, donde la sociedad requiere de personas que susciten el ascendiente propio de los espíritus superiores, la voz orientadora del rector de la Universidad Católica, Juan de Dios Vial Correa, ha vuelto a razonar con toda la fuerza de su jerarquía intelectual y de su calidad moral.

En un mensaje a su comunidad universitaria, el rector Vial ha expuesto conceptos referidos al difícil momento por el cual atraviesa dicho plantel, como víctima de la sistemática acción violentista que ciertos grupos de estudiantes ejercen hoy en ella.

Sin embargo, tanto la evidencia de que dicha amenaza afecta hoy — incluso en mucho mayor medida — a otras universidades del país como la profundidad y validez general de los planteamientos del rector Vial, explican que éstos hayan alcanzado la más amplia resonancia en la opinión pública nacional.

En uno de sus acápites principales, el aludido documento aborda el tema de la autonomía universitaria, señalando que ella consiste en "la capacidad (de las universidades) de regir su vida interior por medio de normas y órganos de gobierno propios", dentro de los marcos de la ley civil y — en el caso de una Universidad Católica — también de la ley canónica.

Luego de puntualizar que ese plantel goza hoy de dicha autonomía, el rector Vial añade:

"La autonomía puede ser violada desde fuera, como puede acontecer, por ejemplo, si un gobierno se inmiscuye en aspectos del gobierno universitario que le corresponden a la propia institución. Pero ella también puede ser violada desde dentro, cuando grupos de presión recurren a la fuerza para violar de modo sistemático la normativa universitaria y hacerla inoperante."

El punto reviste especial importancia, porque si bien el prolongar injustificadamente la intervención gubernativa de la generalidad de las universidades chilenas constituye, cada vez más, un factor lesivo para su adecuada autonomía, la principal y más grave amenaza que hoy la acecha proviene de los



grupos politizados que quieren — según expresiones del rector Vial — "usar a la universidad como un instrumento al servicio de una estrategia política", violentando así "los derechos de todos los que no comparten esa estrategia" y poniendo "en riesgo a una institución que es, por su naturaleza, mucho más permanente que la coyuntura a la que se la quiere esclavizar".

Esto último cobra ribetes particularmente graves si en forma sistemática ello se hace — como lo denuncia el rector Vial — recurriendo "friamente al arma de desacreditar, difamar, o amenazar a otro", o montando "actos destinados a injuriar". Tal como si se realizan por "bandas vociferantes... que impiden todo trabajo... provocan enfrentamientos y luego se dispersan creyendo tal vez haber hecho algo en favor de la 'movilización social', pero dejando una triste huella de tiempo perdido, trabajo frustrado y convivencia ultrajada".

Las clarificaciones enunciadas adquieren especial oportunidad cuando hasta un cuerpo académico de la Universidad de Chile ha defendido — tal como suena — una "toma pacífica" de un reciente local universitario por un grupo estudiantil.

En la mezcolanza de tan variados términos de moda (como "tomas", "ocupaciones", "sit-in", "vigilias", etcétera), lo menos que cabe pedir de parte de cualquier académico es que se advierta que un acto jamás será pacífico, si él violenta injustificadamente — sea de modo físico o moral — los legítimos derechos de terceros. Y una "toma" — por definición — impide arbitrariamente que quienes tienen derecho a ingresar a un recinto lo hagan sin el beneplácito de sus ocupantes. No cabe, por ende, una "toma pacífica". Ella siempre conlleva un signo violento. Desconocerlo es distorsionar los términos y desquiciar los conceptos. Tanto más si ello se realiza en aras de defender la autonomía universitaria.